

ble: las pruebas producidas por la parte de los quejosos y á solicitud del promotor fiscal: los pedimentos de estos funcionarios, el alegato del C. Lic. Félix Vergara Lope apoderado sustituto de los promoventes: la sentencia del juez de Distrito: los escritos presentados á esta Corte Suprema de Justicia con motivo del presente juicio; y todo lo demas que consta de autos y ver convino.

Considerando: que es facultad de las asambleas municipales evitar en la poblacion de sus respectivas municipalidades las industrias nocivas y prescribir el modo y forma en que ejerzan las que puedan serlo, consultando la salud y bien estar de los habitantes: que de esta facultad ha usado la asamblea municipal de Zimapan, evitando con su decreto reclamado que las calcinaciones de metales al aire libre no sean nocivas á la salubridad y bienestar del pueblo, sometiénolas para que no lo sean á las condiciones que el mismo decreto expresa; y que estando expedido con derecho aquel decreto, falta la violencia que con él se haya efectuado al derecho de los quejosos violando en sus personas las garantías que invocan.

Por tales consideraciones y con apoyo de la ley de veinte de Enero de 1869, se resuelve:

Primero; es de revocarse y se revoca la sentencia del juez de Distrito del Estado de Hidalgo pronunciada en Pachuca á 22 de Noviembre próximo pasado, por la cual declara: que la justicia federal ampara y protege á los CC. Mateo de la Tijera, Néstor Martínez, Manuel Andablo, Euterio Mendoza, Praxedis Lara, Francisco Perez, José Hermide, Rafael Miranda, Procopio Artiz y Pedro Ramirez contra el decreto de la asamblea municipal de Zimapan que prohibe á una legua de distancia de la poblacion la calcinacion de metales al aire libre.

Segundo; la justicia de la Union no ampara ni protege á esos CC. contra el decre-

to de la asamblea municipal de que se ha hecho mérito, fechado á 13 de Mayo de corriente año de 1871.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de Distrito del Estado de Hidalgo con copia certificada de esta sentencia, archivándose á su vez el tomo.

Así por mayoría de votos lo mandaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José Garcia Ramirez.*—*Luis Maria Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Diciembre diez y seis de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Interpuesto por el C. Francisco Diez Marina, ante el juzgado de Distrito de Querétaro, contra la prefectura de este distrito, por una multa de cincuenta pesos que le impuso por infraccion de la ley sobre plagarios.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que con motivo de haberse verificado un robo el día treinta de Setiembre anterior en el camino carretero de esta ciudad á la de México, que linda con la hacienda de Miranda, le fué impuesta al propietario de ésta, Don Francisco Diez Marina, una multa por el C. prefecto político de este distrito, fundándose en la infraccion del artículo 11 del reglamento de la ley de 18 de Mayo de 1871, de parte del penado. Este cree violadas en

su persona las garantías individuales que otorga la Constitución federal en sus artículos 4º y 27; sobre cuyo punto omito el que suscribo toda reflexión.

El artículo 11 del reglamento referido, impone la obligación á los dueños de las fincas de campo, de perseguir á los bandidos, *tan luego como tengan noticia de que se encuentran en terrenos de dichas fincas, con la gente que tuvieran disponible.* Los que no cumplan con lo prevenido en este artículo, podrán ser castigados con una multa de veinte á doscientos pesos, ó en su defecto, prision de cinco á treinta días que les podrá imponer la autoridad política de su jurisdicción, *previa la averiguación correspondiente.* El artículo 8º de la misma dispone: que los referidos propietarios, den aviso los días 1º y 16 de cada mes, de las novedades relativas á puntos de seguridad pública, ocurridas en la hacienda ó rancho de su pertenencia. La falta de cumplimiento de esta prevención se castiga con una multa de diez á veinticinco pesos ó prision de dos á cinco días.

Supuesto que en el caso presente solo se trata de imposición de multa por la autoridad política, si hay alguna violación de garantía individual debe buscarse en los artículos 21 y 22 del código fundamental, únicos que tratan de esa materia. El primero de estos asienta por regla general, que la aplicación de las penas propiamente tales, es exclusivamente de la autoridad judicial; y como excepción: que la política ó administrativa solo podrá imponer como corrección, hasta quinientos pesos de multa ó hasta un mes de reclusión, *en los casos y modos que expresamente determine la ley.* El segundo prohíbe la multa excesiva.

Aplicando todas estas disposiciones legales al acto del C. jefe político, salta á los ojos que es anticonstitucional. Se ha visto que solo puede imponer multas ese funcionario en los casos y modos que la ley determine. Se ha visto también que para im-

poner una multa de cincuenta pesos conforme al artículo 11 del reglamento de 18 de Mayo, es indispensable que haya precedido la correspondiente averiguación, que debe versar sobre los puntos siguientes:

1º Que el encargado ó dueño de la finca haya tenido noticia de que los bandidos se encuentran en terrenos de su finca; 2º que hayan tenido gente disponible para perseguirlos; 3º que esta gente no haya puesto obstáculo para prestar sus auxilios. Como del informe del C. prefecto, no conste que haya procedido semejante averiguación ni que se hayan observado las formalidades que exigen las fracciones 4ª y 5ª del artículo 20 de la Constitución, resultan violadas las predichas garantías.

Hay mas: el C. prefecto ha procedido á imponer la pena de cincuenta pesos de multa al C. Francisco Díez Marina, porque habiéndose verificado un robo en el camino nacional en parte que linda con la hacienda de Miranda, dió aviso de no haber ocurrido novedad en la quincena. Así pues, suponiendo que haya habido infracción de ley por parte de éste, nunca pudo aplicarse mayor multa que la de veinticinco pesos designada por el artículo 8º de la referida ley; por lo que la impuesta resulta ser excesiva, contra lo prevenido en el artículo 22 de la Constitución.

Por estas consideraciones y las demás que tenga á bien suplir el juzgado con su conocida inteligencia; el promotor fiscal pide se sirva declarar, que la justicia de la Unión ampara y protege al C. Francisco Díez Marina contra el acto del C. prefecto del distrito del Centro, que le impone una multa de cincuenta pesos; por importar una violación de las garantías otorgadas por los artículos 20, 21 y 22 de la Constitución federal.

Querétaro, 2º Octubre veintitres de mil ochocientos setenta y uno.—*Luis Castañeda.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Querétaro, Noviembre veinticuatro de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio de amparo promovido por el C. Francisco Díez Marina, á virtud de reputar violadas en su persona algunas de las garantías que otorga la Constitución general de la República, con la multa de cincuenta pesos que le impuso la prefectura del Distrito del Centro, por infracción del art. 11 de la ley de 18 de Mayo último; el auto de suspensión del acto reclamado; el informe sin justificación evacuado por dicha prefectura; las pruebas rendidas por el quejoso, el oficio de fojas 19 en que el C. prefecto manifiesta no haber hecho información escrita por no expresar la ley lo fuese así; lo alegado por las partes; los varios pedimentos fiscales con lo demás que verse debió.

Considerando: que el art. 11 de la ley de 18 de Mayo último impone la obligación á los "Dueños ó encargados de las fincas de campo, por sí ó por personas de su confianza, de perseguir á los bandidos *tan luego como tengan noticia* de que se encuentran en terrenos de la misma finca;" que el texto de dicho art. manifiesta como es natural, ser indispensable para contraer la obligación de perseguir á los bandidos, que el dueño ó encargado de una finca tenga conocimiento de la permanencia de ellos en los terrenos de su dominio; que por el informe del prefecto de este Distrito solo consta, que por orden de dicha autoridad uno de los robados fué en unión de un agente de policía á designar el lugar en que el delito se perpetró, resultando haber esto tenido lugar en terrenos de la propiedad del quejoso, sin existir prueba alguna del conocimiento que exige el referido art. 11 al dueño ó encargado de la finca, en cuya demarcación existen los bandidos ó se perpetró el delito; que es bien sabido *no se presume un hecho si no se prueba*, y á mayor abundamiento consta de autos, que ni

el guarda cuartel ó juez de paz de la finca, ni los que en ella habitan, tuvieron noticia de la permanencia de los bandidos y robo cometido.

Considerando: que las garantías constitucionales suspensas por el art. 1º de la citada ley, lo están única y exclusivamente para los plagiarios y salteadores; que previniendo el art. 21 de la Constitución federal. "Que la autoridad política ó administrativa solo podrá imponer como corrección hasta quinientos pesos de multa ó hasta un mes de reclusión, en los casos y modo *que expresamente determine la ley,*" y estando expresamente determinado por la tantas veces citada ley en el final de su artículo 11, el que á los infractores de dicho artículo "se les castigue con una multa de veinte á doscientos pesos, ó en su defecto prisión de cinco á treinta días, que le podrá imponer la autoridad política de su jurisdicción, *previa la averiguación correspondiente,*" cuya circunstancia, previa á la imposición de la pena, no tuvo verificativo en el presente caso, sin ser atendible la razón expuesta á fojas 19 por el C. prefecto de que la ley no indica si la averiguación ha de ser verbal ó escrita, por ser un principio de derecho, ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus L. 32 § de Recept. qui arb, y ser bien sabido que ninguna ley puede pretender se hagan averiguaciones ó informaciones de palabra, en las que hayan de deponer testigos sobre un hecho ó delito, de cuyas informaciones verbales no quedaria ciertamente constancia alguna, como acontece en el presente caso, privando así al penado de la garantía que la ley otorga, á la vez que servir de justificación á la autoridad, circunstancia y carácter de toda información ó averiguación jurídica ó legal. Por esas consideraciones, de conformidad con el pedimento fiscal y con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución general de la República, debia de fallar y fallo: Primero; que la justicia de la Unión am-

para y protege al C. Francisco Diez Marina.

Segundo; Remítase este juicio á la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su revision, sacándose previamente las copias respectivas para su publicacion.

Tercero; provéngase al C. Francisco Diez Marina reponga el papel gastado en el presente, con el del sello correspondiente. Así en definitiva juzgando lo pronunció, mandó y firmó el C. juez de Distrito del Estado, Lic. Víctor de la Peña y Barragan. Doy fé.—*V. de la Peña Barragan.*—Ante mí.
—*Francisco Ruiz.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México. Diciembre nueve de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Querétaro, por el C. Francisco Diez Marina, contra el prefecto político del Distrito de esa ciudad, que le impuso una multa de cincuenta pesos por infraccion del art. 119 de la ley de 18 de Mayo de este año.

Considerando: que la obligacion que este art. impone á los dueños ó encargados de fincas rústicas de perseguir por sí ó por personas de su confianza á los bandidos, tan luego como aquellos tengan noticia de que se encuentran en terrenos de la propia finca, es bajo el concepto racional de que se tenga conocimiento del hecho: que del expediente aparece, que no se tuvo conocimiento oportuno de tal hecho en la hacienda de Miranda, en que aconteció y de la que es propietario el quejoso: que la citada ley de Mayo dispone, que para la imposición de pena como la de que se trata se forme previa averiguacion: que la informacion previa no se formó debidamente, pues segun dice el jefe político del Distrito de Querétaro la informacion en virtud de que

procedió fué verbal, y las informaciones que en casos tales corresponde formar deben ser escritas, ya para que los interesados puedan usar de sus derechos, ya tambien para que sirvan de justificacion á la autoridad: que esas informaciones deben formarse con noticia de los interesados con el mismo fin que puedan usar de sus derechos; y que las circunstancias referidas son propias de toda informacion para que tengan carácter legal; se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada el 24 del próximo pasado por el juez de Distrito de Querétaro que declara, que la justicia de la Union ampara y protege al C. Francisco Diez Marina contra el acto del C. prefecto político del Distrito de la ciudad de Querétaro, que le impuso una multa de cincuenta pesos por infraccion del art. 119 de la ley de 18 de Mayo de este año.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el tomo.

Así por mayoría de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafraqua.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar.*—Secretario.

Son copias que certifico. México, Diciembre diez y seis de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta,* oficial mayor.